

## Los tribunales ghaneses deberían ser aplaudidos por hacer lo correcto con respecto a la fragata Libertad

*Por Franklin Cudjoe*

**Resulta reprensible oír a los argentinos impugnar el sistema judicial de Ghana declarando su desconfianza hacia nuestro sistema legal, con la embajadora Susana Ruiz Cerrutti haciendo declaraciones de que la Argentina acudirá directamente a los tribunales internacionales en lugar de presentarse ante las cortes ghanesas por su desconfianza de imparcialidad en las cortes locales. Tiene derecho a eso, pero es una clara muestra de la falta de valoración de Argentina hacia los grandes pasos que ha dado Ghana en la construcción de instituciones para el progreso. La lección de esto es que los gobiernos que incurren en deuda externa son adultos maduros que deberían ser responsables de sus acciones y pagar sus deudas. Ellos y ojalá también sus países, se beneficiaron de los fondos recibidos y es reprensible moralmente esperar que sus financistas paguen por incapacidad para honrar sus obligaciones.**

**Franklin Cudjoe** es director y miembro fundador de IMANI, un centro de estudios ghanés clasificado como el quinto más influyente de África (2009) y el único instituto africano entre los 25 más innovadores del mundo en 2010 y entre los 20 más innovadores en 2011. Cudjoe ha recibido dos premios John Templeton Foundation y el primer galardón Anthony & Dorian Fisher Award y ha sido citado en la Cámara de los Comunes del Reino Unido para el debate sobre cooperación y desarrollo en África.



El jueves 4 de octubre de 2012, ARA Libertad, un barco de entrenamiento militar argentino que amarró en el Puerto de Tema quedó retenido por órdenes de la Suprema Corte de Ghana para disgusto de todo el gobierno de Argentina.

La Corte Suprema en Ghana le concedió a NML Capital Limited, “un acreedor comercial de la República de Argentina, una orden judicial y una orden de conservación preliminar contra ARA Libertad”. La orden requirió que Libertad fuera retenida en el Puerto de Tema a la espera de la audiencia de la aplicación en Ghana de los juicios contra Argentina llevados a cabo en la Corte del Distrito del Sur de Nueva York, en Estados Unidos, apoyados por juicios similares en Londres. Sin embargo, Argentina podría lograr la liberación de la nave pagando una fianza en la Suprema Corte en Accra muy menor a los cerca de 300 millones de dólares que debe desde 2001. Esto fue aprobado y los tribunales de Ghana establecieron la fianza en 20 millones de dólares o en su defecto dejar la Fragata, que, además, los argentinos han declarado estar dispuestos a hacer, para salvar (lo que queda) de su “dignidad nacional”.

La Presidente de Argentina, Cristina Fernández, en un discurso transmitido al mundo reiteró su anterior postura: “Mientras yo sea Presidenta, se podrán quedar con la fragata pero con la libertad, la soberanía, la dignidad de este país, no se va a quedar nadie”. “No se va a quedar con eso ningún fondo buitres, ni nadie”, agregó. Los argentinos también pueden tener la esperanza, más allá de todo, de utilizar su membresía temporaria en el Consejo de Seguridad de la ONU para forzar a Ghana a liberar el barco.

Ahora, veamos cómo Argentina se metió en este lío.

Hace algunas décadas Argentina tomó dinero de bonos fluctuantes y de otros instrumentos financieros. Siendo entonces un país viable se auspiciaron esos bonos y la gente le prestó millones de dólares que gastaron con la promesa de devolverlos según un calendario de pagos. Argentina no pudo pagar, las deudas se convirtieron en un problema y fueron heredadas por los sucesivos gobiernos. Los registros indican que Argentina debe un total de 100.000 millones de dólares a prestamistas. Fondos como el de Paul Singer compraron la deuda argentina en mercados secundarios, ante la actitud del gobierno argentino que el juez estadounidense Thomas Griesa (quien lleva la mayoría de esos casos) describió como “hacer todo lo posible para no pagar los fallos legítimos”, recurrieron a una cruzada para recuperar el dinero, por lo general persiguiendo los activos argentinos por el mundo. El gobierno argentino también ha declarado una guerra contra los llamados “Fondos Buitres”

y ha jugado a las escondidas en la vida real con estos prestamistas.

Más allá de la vergüenza global que esta saga trajo a la administración Kirchner y en cierta medida al gobierno ghanés, parece ser una opinión popular en Argentina que Ghana era lo que un periodista argentino le dijo a titulares de IMANI<sup>1</sup>: que Ghana es vista como una república bananera y que necesitaba acosar, al menos de la forma en que sucede en los corredores del poder. Cómo se puede llegar a dicha conclusión, más allá de las distantes relaciones diplomáticas que existen entre ambos países, supera la imaginación de cualquiera. Lo más genial de esta saga es que a los ghaneses no les interesa y mucho menos pueden temer una medida agresiva descarada pero discordante de declaración de “guerra” con golpes en el pecho, cuando la nave involucrada es un barco de guerra de adorno.

Al menos hay otro motivo para que Argentina esté furiosa. Su dignidad, claro, la “dignidad nacional” argentina.

Pero en una competencia de dignidad entre Argentina y Ghana, cuando se trata de responsabilidad financiera, es otro ámbito en el que la primera se ve desdibujada. Hacia fines de la década de 1990 y comienzos de 2000, la Argentina fue testigo de manifestaciones diarias y violencia, “una procesión de presidentes por un día, y el Apocalipsis reunido del default y la devaluación”. Sumado esto a una gran corrupción oficial, el país simplemente colapsó de su nivel de casi primer mundo a los peldaños de los más pobres en el mundo pobre. Hubo algunos tiempos prometedores, pero incluso esos tiempos bajo la presidencia de Carlos Menem, por ejemplo, estuvieron signados por acusaciones de corrupción y su participación personal en la venta ilegal de armas. Luego de 5 meses de arresto domiciliario, Menem fue liberado por los amigos de la Suprema Corte que él había nombrado.

Transparency International, el instituto que encuesta y publica el índice anual de niveles de corrupción, en 2001 ubicó a la Argentina en el triste puesto 57 de 91 países. Peor, en otras palabras, que Botswana, Namibia, Perú, Brasil, Bulgaria y Colombia. Ghana apareció en el puesto 59 en 2001. Al año siguiente Ghana se ubicó en el 50 y Argentina en el 70. En 2004, Ghana ocupó el puesto 64 mientras que Argentina el 108. En 2007, Argentina calificó en el 105 y Ghana se ubicó en el 69. En 2009, Argentina se ubicó 107 y Ghana 69. Argentina estuvo 105 y Ghana 62 en 2010. En 2011, Ghana ocupó el puesto 69 mientras que Argentina estuvo en el 100.

En el índice de libertad económica, Ghana supera por poco a la Argentina en muchas de las categorías y en última

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Argentina	83/123	99/127	83/130	112/141	110/141	99/141	113/141	119/141	127/144
Ghana	76	58	72	83	56	72	64	70	71

instancia en el resultado final durante varios años. La libertad económica se logra cuando los individuos de un país tienen la libertad de pensar, tomar decisiones, poseer propiedad legítimamente adquirida sin retención ni obstáculos y se es capaz de usar la prioridad de comprometerse en intercambios voluntarios de parte o la totalidad de la propiedad. La Libertad Económica en el Mundo mide el grado hasta el cual las políticas y las instituciones de los países apoyan la libertad económica. Se utilizan 42 variables para construir un índice y medir el grado de libertad en cinco grandes áreas: el tamaño del gobierno; el sistema legal y los derechos de propiedad; la política monetaria; la libertad para el comercio internacional y la regulación. La tabla indica exactamente cuál de los dos países ha sido más libre.

El relato histórico de la dilapidación de la economía de Argentina puede plantearse que surgió con la administración de Juan Perón en 1946. Sobre la cuestión crucial de la independencia judicial, Brink Lindsay, investigador de Cato escribió que “Antes del descenso al estatismo, los jueces argentinos gozaban de largos períodos de permanencia sin ser molestados por interferencia política. Al inicio de la primera administración de Perón en 1946, los magistrados de la Corte Suprema permanecían, en promedio, 12 años en el cargo. Desde entonces se ha venido cuesta abajo. A partir de 1960, el promedio de permanencia ha caído hasta debajo de cuatro años. Después de Perón, quien dejó la presidencia por segunda vez en 1974, cinco de 17 presidentes han nombrado a todos los miembros de la corte durante su término, distinción que previamente sólo había sido ejercida por Bartolomé Mitre, quien gobernó entre 1862-1868. De manera, mientras en la época previa a Perón la mayor parte de los jueces era nombrada por la oposición, con Perón las cosas cambiaron. La Corte Suprema de Justicia, supuesto baluarte del Estado de Derecho se redujo a ser un títere del poder ejecutivo”.

Ante el panorama arriba descrito, resulta reprensible oír a los argentinos impugnar nuestro sistema judicial declarando su desconfianza hacia nuestro sistema legal, con la embajadora Susana Ruiz Cerrutti haciendo declaraciones de que la Argentina acudirá directamente a los tribunales internacionales en lugar de presentarse ante las cortes ghanesas por su desconfianza de imparcialidad en las cortes locales. Tiene derecho a eso, pero es una clara muestra de

la falta de valoración de Argentina hacia los grandes pasos que ha dado Ghana en la construcción de instituciones para el progreso.

Tras años de gobierno militar, al cual muchos culpan del estancamiento económico de Ghana, este país ha disfrutado de una democracia ininterrumpida por más de 20 años. Han ocurrido hechos lamentables al igual que hechos positivos. En este aspecto, Ghana y Argentina ofrecen un contraste. Ghana, como gran parte de África, está creciendo y su economía se está expandiendo. Salió de su estatus de País en Vías de Desarrollo Altamente Endeudado (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) y recientemente vendió Eurobonos – a una tasa de interés en la que Argentina sólo puede soñar. Esto se debe a que Ghana tiene una fuerte tradición de estado de derecho. Es una tradición bipartidaria. Argentina, por otro lado, repudió sus deudas y no obedece veredictos judiciales de Nueva York, Reino Unido, Banco Mundial (ICSID) y ahora Ghana. Por este motivo las inversiones se escapan de Argentina, su economía es un desquicio, y generó una reprimenda del FMI el mes pasado.

Los valores generales de la discusión se basan en que el estado de derecho debe ser mantenido en Ghana, y ningún político o fuerza extranjera debería alterarlo. Esta decisión judicial sola trae muchas dimensiones de la naturaleza y el futuro de las relaciones de poder dentro y fuera de Ghana. Entre otras examina:

- La verdadera fuerza de nuestro sistema judicial y su estabilidad para proteger a los ciudadanos (si puede proteger los intereses extranjeros contra nuestro gobierno puede proteger a los ciudadanos contra los poderes del caso).
- El estado de derecho, incluyendo el derecho internacional, y si nuestro sistema judicial continuará reafirmando en las complejas cuestiones internacionales.
- El estado de nuestro sistema político; si hemos madurado hasta el punto en el cual los políticos permitirán que la ley tome su curso y no intervengan incluso cuando sea incómodo.
- Si nuestros líderes están más allá de acosar y presionar a una nación más grande (Argentina). Algo

que necesitaremos cuando negociemos con China y la UE.

- Fundamentalmente esta no es una cuestión Ghana versus Argentina. Esto no es como alguien lo ha considerado en los medios internacionales, Ghana molestando a Argentina, esto sencillamente es un caso simple de un tribunal encargándose de una cuestión y dictando un fallo sobre la base del derecho y la evidencia que se le pone enfrente. La nación de Ghana no tiene ningún interés directo en esta cuestión salvo hacer cumplir la ley al igual que todas las naciones civilizadas. De hecho muchos ghaneses resienten la sugerencia de que nuestras cortes no son capaces de tomar decisiones independientes y que por ende ¡esto debió haber sido la directiva de algún político!
- Ghana NO es una república bananera y hemos pagado los costos del fracaso económico, honramos nuestras deudas y de aquellas de las que fuimos perdonados se debió al buen comportamiento en términos de respeto por los principios de la democracia, el estado de derecho, la libre empresa, el respeto por los contratos y la administración

descentralizada del poder y los recursos, principios que no existen en la Argentina actual con su mala situación crediticia y el total desprecio hacia la justicia internacional.

- Que ningún nivel de presión diplomática y por extensión ninguna fuerza del poder ejecutivo puede usarse sobre nuestros jueces para cambiar un fallo previo.
- Que las acciones de Argentina constituyen una seria erosión de los derechos de los inversores extranjeros. En este sentido, los tribunales ghaneses deberían ser aplaudidos por hacer lo correcto con respecto a Libertad.
- La lección de esto es que los gobiernos que incurren en deuda externa son adultos maduros que deberían ser responsables de sus acciones y pagar sus deudas. Ellos y ojalá también sus países, se beneficiaron de los fondos recibidos y es reprobable moralmente esperar que sus financistas paguen por incapacidad para honrar sus obligaciones. Es moralmente cuestionable, específicamente degradante y condescendiente tratar a estos gobiernos como si fueran delincuentes infantiles.

#### **Notas**

<sup>1</sup> IMANI es un respetado centro de estudios de considerable influencia local e internacional. En 2009, la revista Foreign Policy nombró a IMANI como el quinto think tank más influyente de África. En 2010, IMANI fue seleccionado como el think tank número 25 entre los más innovadores del mundo. En 2011 IMANI fue votado como el 6 think tank más efectivo de África y entre los primeros 20 más innovadores a nivel global. En 2010 IMANI lideró el equipo de trabajo del Banco Mundial para África para investigar lo que necesitan los africanos del Banco Mundial.